

Miles de trabajadores se movilizarán para enfrentar política antipopular del gobierno

El gobierno de Carazo siguiendo su antipopular política en materia de precios decretó un nuevo aumento en el precio de los combustibles, que agravará aún más la difícil situación económica que atraviesan los trabajadores y el pueblo en general.

Al subir el precio de la gasolina a 17,25 colones el galón, está alcanza un aumento del 100 por ciento, en los 14 meses del actual gobierno. Mientras tanto el diesel, al decretarse ahora un aumento de más de un 100 por ciento (pasa de 4 a 8,50 colones el galón,) habrá experimentado un aumento total cercano a un 200 por ciento.

Estas alzas resultan exageradas, si se comparan con los aumentos en el precio de los combustibles decretados durante el presente año por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

No cabe duda, que el gobierno caracista ha especulado con esos aumentos, impulsando una campaña publicitaria con el objeto de evitar y neutralizar las reacciones contra las constantes alzas.

¿QUIEN PAGA LOS AUMENTOS?

La actual administración ha maniobrado para evitar que cada aumento vaya acompañado con un alza en precio del transporte remunerado como han exigido los autobuseros. Ya que esto hubiera golpeado aún más la deteriorada imagen del gobierno.

Han preferido seguir otro camino. El camino de subvencionar con enormes sumas millonarias a los dueños de las líneas de autobuses. En estos días se les empezó a pagar 350 millones por ese concepto.

Se crea así, la imagen de que los usuarios, o sea el pueblo no sufre las consecuencias directas de las alzas. Esto es una situación absolutamente falsa. Son y han sido hasta ahora, los sectores populares los más sacrificados en esa cadena de alzas.

Como siempre, los grandes millonarios, los comerciantes e industriales esquivan los graves efectos de crisis, decretando alzas en los precios de los artículos de todo tipo. Su margen de ganancias no se ve afectado sustancialmente.

EL FEO ROSTO DE LA CRISIS

Mientras el feo rostro de la crisis no se asoma en las lujosas residencias de los grandes potentados, si lo hace en los hogares de los trabajadores del campo y de la ciudad, y de los empleados.

El pueblo trabajador no tiene otro recurso que exigir aumento salarial que compense el alza en el costo de la vida. Pero en este campo la política del gobierno caracista ha sido muy clara: bajos salarios y en casos más graves, congelación.

El engaño de que han sido objeto los empleados públicos y los educadores, marca claramente la posición abiertamen-

te antipopular del actual gobierno. Tras de decretar un ilimitado aumento salarial ahora lo condiciona con la aprobación del llamado "paquete tributario".

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Estela Quesada, persiste en promover la persecución sindical y su campaña contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales clasistas. Esto con el evidente propósito de frenar la organización y movilización de los trabajadores contra la política patronal del gobierno de Carazo.

ANTECEDENTES

El gobierno aumentó durante el año pasado (de mayo a diciembre), todos los precios de los artículos de consumo básico, con lo que el alza del costo de la vida alcanzó a fin de año niveles nunca vistos.

A la par de esta desenfrenada carrera alcista, el gobierno ha seguido una rectilínea política de bajos salarios, estimulado por la presión de las Cámaras Patronales.

Otro factor que ha golpeado el debilitado bolsillo del trabajador, ha sido la desenfrenada especulación en los precios. Los grandes comerciantes no han tenido el menor escrúpulo a la hora de hacer escasear un producto o de decretar aumentos por su cuenta. Ante tal situación, el gobierno lo único que ha hecho es montar una intensa campaña para demostrar que iba a controlar la especulación. Pero de ahí no ha pasado.

LA SITUACION DE NICARAGUA COMO PRETEXTO

Tanto durante el año pasado como en el presente, el gobierno ha utilizado la situación de Nicaragua, como parapeto para capear los efectos de su política antipopular.

Los aumentos en los precios, más polémicos han sido decretados en momentos críticos en el desarrollo de la lucha del hermano pueblo nicaragüense.

Pero ahora la situación ha cambiado. En medio de la difícil situación económica, el pueblo de Nicaragua celebra su victoria contra el somocismo y el imperialismo, y reconstruye con su esfuerzo su país. Hoy día el gobierno de Carazo no tiene otra situación amortiguadora en su horizonte. No tiene otro camino que enfrentar la crisis.

El anuncio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y de las organizaciones gremiales de los educadores de ir a la huelga ante el incumplimiento de los compromisos por parte del gobierno los preparativos de movilizaciones populares para exigir alzas salariales y congelación de precios son algunas de las manifestaciones más claras de que los trabajadores y sus organizaciones de masas ya llegaron al límite de paciencia.



Empleados Públicos y educadores irán a la huelga

"Si no se cumplen los compromisos adquiridos por el gobierno en agosto, habrá huelga en setiembre", dijo José Fabio Araya, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

En la pasada lucha laboral, la ANEP en unión de varios sindicatos del Gobierno Central, logró que éste se comprometiera a cumplir una serie de peticiones.

Araya Monge, (quién además de ser el actual secretario general de esa asociación, es postulado de nuevo para dicho cargo, por el grupo AVANCE para las próximas elecciones del 11 de agosto), recalzó que si el Poder Ejecutivo, en el mes de agosto no hacía una realidad, el ampliar a cuatro meses el período de incapacidad por maternidad, lo mismo que la incorporación de todos los empleados públicos al régimen del servicio civil y también el ampliar los deducibles del impuesto sobre la renta (deducible único de 25 mil colones a 40 mil colones) y así como el pago de 200 colones de aumento salarial con los adicionales, entonces el 3 de setiembre los empleados públicos se alzarán en huelga.

Por otro lado, el congelamiento en los precios de los productos básicos, es otra de las peticiones que con mayor énfasis hacen los trabajadores públicos, ya que argumentan que nada se gana con que se aumenten los salarios si los precios de los artículos de primera necesidad aumentan también.

Por su parte, José Joaquín Meléndez, Secretario General del Sindicato de Educadores Costarricenses (S.E.C.) manifestó a "EL TRABAJADOR" que el SEC está haciendo un análisis para fijar una posición férrea contra el gobierno de la República, ya que éste está supeditando una revaloración de 200 colones para los educadores al Paquete Tributario, y que este proyecto nadie sabe cuando va a entrar en vigencia, y que los educadores no están en la disposición de darle fargas al asunto.



Todo el pueblo rechaza las alzas y se prepara para frenar la política patronal del gobierno.

Meléndez afirmó, que si el gobierno no fija una fecha pronta para que la revaloración se haga una realidad, entonces el SEC le va a dar tiempo hasta el mes de setiembre, y de lo contrario existe la disposición de ir a la huelga.

Los dirigentes del SEC y de la ANEP estudian la

posibilidad de hacer un frente común entre ambos sindicatos y que si se llegara a una huelga participarían las confederaciones y sindicatos de educación y públicos en forma conjunta.

Es así como, los sindicatos de los trabajadores públicos y de educadores que se sumarán al paro, además del SEC y de la ANEP, serán la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

De tal manera, que si el gobierno no cumple con los compromisos adquiridos, en Costa Rica se desataría una huelga sin precedentes, y que de seguro paralizaría a todo el país.